

La Autoridad de Tránsito de Bogotá D.C, en uso de sus facultades legales señaladas en los Artículos 3, 7 y 134 de la Ley 769 de 2002 y sus modificatorios (Código Nacional de Tránsito) y en aplicación de lo establecido en el inciso 2 del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:

EXPEDIENTE №.	469 DE 2024 AMADEUS CRISTIAN CAMILO DIAZ CARDENAS
FECHA DE EXPEDICIÓN:	3/26/2024
FIRMADO POR:	DARIELA TRUJILLO DOMINGUEZ ORIGINAL FIRMADO POR LA AUTORIDAD DE TRANSITO.

ADVERTENCIA

ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE EFECTUAR LA NOTIFICACIÓN PERSONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 67 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SE PUBLICA EL PRESENTE AVISO POR UN TÉRMINO DE CINCO (5) DÍAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE **18 DE ABRIL DE 2024**, en la página web www.movilidadbogota.gov.co / Subdirección de Contravenciones (movilidad.gov.co); para mayor información, acercarse a la Secretaria Distrital de Movilidad, Subdirección de Contravenciones, ubicada en la calle 13 No 37 – 35, Segundo Piso – Área de Notificaciones, en el horario de lunes a viernes de 07:00 a.m. a 4:00 p.m.

El acto administrativo aquí relacionado, del cual se acompaña copia íntegra, se considera legalmente NOTIFICADO al finalizar el día siguiente de la desfijación del presente aviso, advirtiendo que contra el presente acto administrativo procede el recurso enunciado en la parte resolutiva del proveído en mención.

ANEXO: Se adjunta a este aviso en **(5)** folios copia íntegra del Acto Administrativo proferido dentro del Expediente No. **469 DE 2024**

CERTIFICO QUE EL PRESENTE AVISO SE FIJA HOY **18 DE ABRIL DE 2024**, A LAS 7:00 A.M. POR EL TERMINO DE CINCO DÍAS HÁBILES.

FIRMA RESPONSABLE FIJACIÓN:	Company and
SONIA PULIDO	

CERTIFICO QUE EL PRESENTE AVISO SE RETIRA HOY **24 DE ABRIL DE 2024**, A LAS 4:30 P.M.

FIRMA RESPONSABLE DESFIJACIÓN:

SONIA PULIDO

Secretaría Distrital de Movilidad Calle 13 # 37 - 35 Teléfono: (1) 364 9400 www.movilidadbogota.gov.co Información: Línea 195





RESOLUCIÓN No. 469 DEL 26 DE MARZO DE 2024

"Por medio de la cual se resuelve la responsabilidad contravencional del señor AMADEUS CRISTIAN CAMILO DIAZ CARDENAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía. No. 1024534745, por no realizar la prueba de alcoholemia conforme las instrucciones dadas, en virtud de lo establecido en el parágrafo tercero del Artículo 5 de la Ley 1696 de 2013".

En la ciudad de Bogotá D. C., el día **26 DE MARZO DE 2024**, siendo las **08:30 a.m.**, cumplido el término señalado en el artículo 136 de la Ley 769 de 2002, Código Nacional de Tránsito Terrestre, modificado por el artículo 24 de la Ley 1383 de 2010, reformado a su vez por el artículo 205 del Decreto 019 de 2012; esta Autoridad de Tránsito conforme a lo establecido en el artículo 134 de la Ley 769 de 2002, Código Nacional de Tránsito Terrestre, avoca conocimiento respecto de la orden de comparendo No. **1100100000038965225**, declarando legalmente abierta la presente audiencia pública.

En este estado de la diligencia, se deja constancia que no compareció dentro del término legalmente establecido el señor **AMADEUS CRISTIAN CAMILO DIAZ CARDENAS**, identificado con la Cédula de Ciudadanía. No. **1024534745**, quien fue notificado mediante la Orden de Comparendo No. **11001000000038965225**.

I. HECHOS

En la ciudad de Bogotá, D.C., el día 03 DE JULIO DE 2023, le fue impuesta al señor AMADEUS CRISTIAN CAMILO DIAZ CARDENAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1024534745, la Orden de Comparendo No. 11001000000038965225, como conductor del vehículo con placa OSY16E, por no realizar la prueba de alcoholemia de acuerdo con las instrucciones dadas, conforme lo establecido en el parágrafo tercero del artículo 5 de la Ley 1696 de 2013, que reza: (...) Parágrafo 3. Al conductor del vehículo automotor que pese a ser requerido por las autoridades de tránsito, con plenitud de garantías, no permita la realización de las pruebas físicas o clínicas a que se refiere la presente ley o se dé a la fuga, se le cancelará la licencia, se le impondrá multa correspondiente a mil cuatrocientos cuarenta (1440) Salarios Mínimos Diarios legales Vigentes (SMDLV) y procederá la inmovilización del vehículo por veinte (20) días hábiles". (Subrayado y negrilla fuera del texto).

El agente de tránsito Ortiz Casilimas Camilo Andrés identificado con placa policial No. 90209, funcionario público en ejercicio de sus funciones suscribe la orden de comparendo en mención y en ella consigna circunstancias de tiempo, modo y lugar que originaron la citación del señor DIAZ a comparecer ante este organismo de tránsito, como que el vehículo en el que se movilizaba era el de placa OSY16E y que como medida preventiva fue inmovilizado con grúa 150 de placa ESO150 con destino al patio Álamos. La clase: particular, tipo: motocicleta, tipo de infractor: conductor y en la casilla 10 "datos del infractor" relaciona nombre y cédula. Adicionalmente, en la casilla de observaciones se relata lo siguiente:

"(...) El examinado se niega a realizar la prueba de alcoholemia, se procede según artículo 5 parágrafo 3 de la ley 1696/2013, el conductor es requerido mediante puesto de prevención en la CRA 30 con calle 19 y posteriormente trasladado en vehículo oficial hasta la estación de tránsito con el fin de adelantar dicho procedimiento."

Entonces, se tiene que la orden de comparendo que fue notificada al presunto infractor como conductor del vehículo de placa OSY16E, es un documento público al ser diligenciado y suscrito por un servidor público en ejercicio de sus funciones y sobre el cual se presume su autenticidad de conformidad con lo normado en el artículo 245 del CGP.

Teniendo en cuenta que el señor **AMADEUS CRISTIAN CAMILO DIAZ CARDENAS** fue citado mediante orden de comparendo No. **1100100000038965225**, para que se hiciera parte dentro del proceso contravencional, conforme a lo señalado en el artículo 2 de la Ley 769 de 2002, Código Nacional de Tránsito Terrestre, que establece: "Comparendo: Orden formal de notificación para que el presunto contraventor o implicado se presente ante la autoridad de tránsito por la comisión de una infracción."; y que una vez vencida la oportunidad para

Secretaría Distrital de Movilidad





comparecer, este no se hizo presente ante este Despacho, ni allegó justificación alguna de su inasistencia ante esta autoridad de tránsito.

En consecuencia, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 136 de la Ley 769 de 2002, Código Nacional de Tránsito Terrestre, modificado por el artículo 24 de la Ley 1383 de 2010, reformado por el artículo 205 del Decreto 019 de 2012, que señala: "(...) Si el contraventor no compareciere sin justa causa comprobada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del comparendo, la autoridad de tránsito, después de treinta (30) días calendario de ocurrida la presunta infracción, seguirá el proceso, entendiéndose que queda vinculado al mismo, fallándose en audiencia pública y notificándose en estrados (...)"; este Despacho continuara con el trámite impartido por la Ley para este tipo de situaciones.

Este Despacho debe aclarar que el ciudadano gozó de todas las oportunidades procesales para ejercer los derechos que le asisten, brindándole la oportunidad para que rindiera su versión libre y espontánea acerca de los hechos que originaron la imposición de la orden de comparendo de la referencia y su consecuente solicitud de pruebas en caso de no estar de acuerdo con la imposición de la misma.

No obstante, ante la inasistencia injustificada por parte del ciudadano y la garantía por parte de este Despacho de sus derechos de contradicción y defensa y el otorgamiento de las oportunidades procesales para ejercerlos, esta autoridad le recuerda al respecto que la Honorable Corte Constitucional ha manifestado:

"Ahora bien, el debido proceso administrativo como derecho fundamental se manifiesta a través de un conjunto complejo de principios, reglas y mandatos que la ley le impone a la Administración para su ordenado funcionamiento (entre otros, se destacan las disposiciones previstas en el artículo 209 de la Constitución y en el capítulo I del Titulo I del C.C.A., referentes a los principios generales de las actuaciones administrativas), por virtud de los cuales, es necesario notificar a los administrados de las actuaciones que repercutan en sus derechos, otorgarles la oportunidad de expresar sus opiniones, y de presentar y solicitar las pruebas que demuestren sus derechos. Actuaciones que, en todos los casos, deben ajustarse a la observancia plena de las disposiciones, los términos y etapas procesales descritas en la ley.

De esta manera, el debido proceso administrativo exige de la Administración el acatamiento pleno de la Constitución y la ley en el ejercicio de sus funciones (artículos 6°, 29 y 209 de la Constitución), so pena de desconocer los principios que regulan la actividad administrativa (igualdad, imparcialidad, publicidad, contradicción y moralidad).

Como contrapartida, el ordenamiento jurídico impone a los administrados, la carga de observar y utilizar todos los medios procesales que la ley les ofrece para proteger y hacer efectivos sus derechos, ya que su conducta omisiva, negligente o descuidada en este sentido acarrea consecuencias jurídicas desfavorables para aquellos, así como la improcedencia de la acción de tutela para efectos de cuestionarlas".

Al respecto, la Corte ha sostenido que:

"Las cargas procesales son aquellas situaciones instituidas por la ley que comportan o demandan una conducta de realización facultativa, normalmente establecida en interés del propio sujeto y cuya omisión trae aparejadas para él consecuencias desfavorables, como la preclusión de una oportunidad o un derecho procesal e inclusive hasta la pérdida del derecho sustancial debatido en el proceso."

Así mismo, dicha corporación ha determinado que:

"Quién no ha hecho uso oportuno y adecuado de los medios procesales que le ley le ofrece para obtener el reconocimiento de sus derechos o prerrogativas se abandona voluntariamente a las consecuencias de los fallos que le son adversos. De su conducta omisiva no es responsable el Estado no puede admitirse que la firmeza de los proveídos sobre los cuales el interesado no ejerció recurso constituya transgresión u ofensa a unos derechos que, pudiendo, no hizo valer en ocasión propia. Es inútil, por tanto, apelar a la tutela, cual si se

Secretaría Distrital de Movilidad





tratara de una instancia nueva y extraordinaria, con el propósito de resarcir los daños causados por el propio descuido procesal."

Por tanto, al paso que es deber de la administración ajustar su actuar a los principios, mandatos y reglas que gobiernan la función pública y que determinan su competencia funcional, en aras de garantizar los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa material, <u>los administrados tienen la carga de observar y utilizar los medios procesales que el ordenamiento jurídico les otorga, so pena de asumir los efectos adversos que se deriven de su conducta omisiva</u>." (Negrillas y subrayado fuera de texto).

Es por todo lo anterior que este Despacho, al observar la conducta procesal del interesado, continuará con las actuaciones que en derecho corresponden.

II. DE LAS PRUEBAS

El artículo 162 del Código Nacional de Tránsito Terrestre permite que, por compatibilidad y analogía normativa, para aquellas situaciones no reguladas en dicho código pueda hacerse uso de aplicación de aquellos instrumentos jurídicos que así lo establezcan. Por consiguiente, se tendrán en cuenta los medios de prueba de que tratan los artículos 164 y siguientes del Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012.

De acuerdo al artículo 176 de la Ley 1564 de 2012 y en cumplimiento de la Resolución No. 1844 de 2015 expedida por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se considera conducente, pertinente y útil **DECRETAR E INCORPORAR** las siguientes pruebas de oficio:

- a) Formato de Entrevista Previa a la medición con alcohosensor de fecha 03 DE JULIO DE 2023, el cual fue debidamente diligenciado por la operadora del dispositivo metrológico, agente CAMILO ANDRES ORTIZ CASILIMAS, conforme a la Resolución No. 1844 de 2015 expedida por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
- b) Certificado de Idoneidad del agente de tránsito operadora CAMILO ANDRES ORTIZ CASILIMAS de fecha 15 DE JUNIO DE 2019, Seminario Manejo de Equipos para la Detección de Etanol Espirado, expedido por el Centro Educativo Escuela de Seguridad Vial, conforme a la Resolución 1206 de 22 diciembre de 2016.
- c) Registro fílmico allegado a este Organismo de Tránsito junto con el comparendo No. 1100100000038965225 por la Policía Metropolitana de Tránsito de Bogotá, en el que se evidencia el procedimiento llevado a cabo para la realización de la prueba de embriaguez al señor AMADEUS CRISTIAN CAMILO DIAZ CARDENAS.

En este estado de la diligencia se deja constancia, que debido a la inasistencia injustificada del ciudadano no se realizó decreto de pruebas a solicitud de parte, ni es posible CORRERLE TRASLADO de las pruebas decretadas de oficio, razón por la cual se continuará con la etapa procesal que en derecho corresponde.

III. VALORACIÓN PROBATORIA

La valoración de las pruebas será realizada con base en artículo 176 del Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012, que dice: "Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba". Así mismo, se tendrán en cuenta los medios de prueba de que trata los artículos 164 y siguientes ibídem.

En este orden de ideas y a sabiendas que la finalidad de las reglas procesales, no es otra que el otorgar garantías de certeza a la demostración de los hechos, este Despacho efectuará el estudio puntual de las pruebas decretadas de la siguiente manera:

Secretaría Distrital de Movilidad





a) ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN CON ALCOHOSENSOR DE FECHA 03 DE JULIO DE 2023:

Referente a la entrevista previa a la medición con alcohosensor, se observa que los datos del ciudadano se encuentran diligenciados correctamente, evidenciándose que el examinado FIRMÓ Y COLOCÓ LA HUELLA en el documento. Además, se evidencia que este se encuentra firmado por la agente operadora del alcohosensor de registro **CAMILO ANDRES ORTIZ CASILIMAS**, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. **80919182**, por lo cual el documento que acá se analiza goza de presunción de autenticidad.

En este orden de ideas, se encuentra que la agente operadora del alcohosensor **CAMILO ANDRES ORTIZ CASILIMAS** en este documento dejó constancia de realizar las preguntas correspondientes a la entrevista previa y anotó las respuestas brindadas por parte del ciudadano referentes a si en los últimos 15 minutos había ingerido licor, fumado, utilizado aerosoles bucales, vomitado, eructado y si tenía algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, palillos, etc.), observándose que el señor **AMADEUS CRISTIAN CAMILO DIAZ CARDENAS** respondió a todo que NO. A continuación, se precisaron las características de identificación del dispositivo alcohosensor que iba a ser utilizado para la toma de la muestra y la negativa del ciudadano a realizar la misma.

El agente operador del alcohosensor **CAMILO ANDRES ORTIZ CASILIMAS** en este documento declara que la calibración realizada al alcohosensor que se especifica en dicho documento, se encontraba vigente al momento de realizar el análisis. Así mismo, en este documento, se aclara que se usaron los procedimientos indicados en la "guía para la medición indirecta a través de aire espirado acatando las instrucciones del fabricante para el uso del equipo".

El documento antes descrito es el reflejo del procedimiento realizado en debida forma por la agente operadora del alcohosensor, ya que el fin de su diligenciamiento era establecer que en el procedimiento realizado (mediciones con el alcohosensor) se contaba con todas las garantías que indica la Resolución No. 1844 de 2015 emitida por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forense, para que fuera posible realizar adecuadamente las mediciones de alcoholemia.

La realización de la entrevista previa se encuentra dentro de la fase preanalítica de la medición que comprende la preparación del examinado y es requisito previo para realizar dichas mediciones. Al respecto, la mencionada norma dice lo siguiente:

(...) " 7.3 REALIZACIÓN DE LA MEDICIÓN Desde el punto de vista analítico, el proceso comprende las siguientes etapas:

7.3.1 FASE PREANALÍTICA

(...) Preparación del examinado (16).

7.3.1.2.2 <u>Entrevista</u>: antes de realizar la medición, <u>se debe preparar al examinado y se le debe hacer una entrevista</u> que se registra en un formato como el que se presenta en el anexo 5. Las preguntas deben ser formuladas de forma clara..." (Negrillas y subrayas fuera de texto).

En el documento que acá se analiza se dejó constancia que se informó al señor **AMADEUS CRISTIAN CAMILO DIAZ CARDENAS** la plenitud de garantías establecidas en la sentencia C-633 de 2014 proferida por la Honorable Corte Constitucional.

b) CERTIFICADO DE IDONEIDAD - AGENTE CAMILO ANDRES ORTIZ CASILIMAS:

Respecto al CERTIFICADO DE IDONEIDAD del agente CAMILO ANDRES ORTIZ CASILIMAS expedido el día 15 DE JUNIO DE 2019, por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses se observa que la agente asistió a la capacitación en el Manejo de Alcohosensores referente al curso que cumple con el requisito de vigencia establecido en el Anexo 2 de la "Guía para la Medición Indirecta de Alcoholemia a través de Aire Espirado"

Secretaría Distrital de Movilidad





Es por lo anterior, que esta autoridad considera que para el momento en que sucedieron los hechos objeto de la notificación de la orden de comparendo de la referencia; esto es, el día 03 DE JULIO DE 2023, la agente CAMILO ANDRES ORTIZ CASILIMAS se encontraba capacitada para operar el equipo con el que se le iba a practicar la prueba al señor AMADEUS CRISTIAN CAMILO DIAZ CARDENAS.

c) REGISTRO FÍLMICO ALLEGADO A ESTE ORGANISMO DE TRÁNSITO JUNTO CON EL COMPARENDO No. 11001000000038965225:

Para el caso bajo examen, se intentó la toma de la prueba con Analizador de Alcohol en aire expirado "Instrumento que mide y muestra la concentración en masa de alcohol en el aire humano espirado dentro de los límites de error especificados." 3 (...) "Mide la cantidad de etanol presente en un determinado volumen de aire espirado, para luego estimar la cantidad de etanol en la sangre a partir de esta medida. No obstante, debido a que el aire que sale al inicio de la espiración no ha estado en contacto con la sangre pulmonar, el alcohosensor está diseñado para tomar una muestra al final de la espiración, que corresponde al aire alveolar" 13. (Resolución 1844 de 2015 "Guía para la medición indirecta de alcoholemia a través de aire espirado" 3. International Organization of Legal Metrology, OIM. International Recommendations OIM R 126. Evidential Breath Analyzers / 13. Manual de Análisis de Alcohol en el aire espirado).

Sin embargo, no se logró la toma de la prueba y es por ello que se analiza una grabación remitido por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá, D.C., en el cual se aprecia que el señor **AMADEUS CRISTIAN CAMILO DIAZ CARDENAS** no realizó la prueba de alcoholemia conforme las instrucciones dadas, observándose lo siguiente:

Se allego una grabación con una duración de cincuenta y tres minutos y cincuenta y dos segundos (53:52), en los cuales se aprecia en primer lugar que el operador del dispositivo alcohosensor, agente **CAMILO ANDRES ORTIZ CASILIMAS**, se presenta ante el ciudadano y le comunica que estaba debidamente capacitado y certificado para llevar a cabo la prueba de alcoholemia, información que podría ser consultada en la página web del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Seguidamente, el uniformado (a) le consulta al presunto infractor sus generales de ley, evidenciándose que este refiere llamarse **CRISTIAN CAMILO DIAZ CARDENAS**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. **1024534745**.

Acto seguido, el alcohosensorista le indica al señor **AMADEUS CRISTIAN CAMILO DIAZ CARDENAS**, que él va a contar lo que ocurrió que, si él llega a decir algo que no está dentro de la verdad, debe decir el ciudadano "eso no es así", con lo cual el ciudadano está de acuerdo, todo esto previo a permitir que realizara un llamada y pudiera hablar con quién refirió era su abogada. Así las cosas, el Subintendente **CAMILO ANDRES ORTIZ CASILIMAS** operador alcohosensorista narra como ocurrencia de los hechos lo siguiente:

"(...) Nos encontramos en la CRA. 30 con CALLE 19 sentido Norte- Sur realizando un puesto de prevención para verificar fiscalización de documentos y estado anímico de diferentes conductores, usted viene transitando en una motocicleta solo, usted es el conductor de una motocicleta creo que de color negro o color gris, usted antes de llegar al puesto de control detiene la motocicleta, de un momento a otro vuelve y prende la motocicleta y arranca cuando salen dos funcionarias policiales adscritas a la Seccional de Tránsito y Transporté de Bogotá, le hacen la señal corporal para que se detenga, usted hace caso omiso, continua y las esquiva, le salgo yo al tercer carril e intercepto la motocicleta le quito las llaves de la misma, orillo la motocicleta, baja usted de la motocicleta y le solicito los documentos de la misma, me manifiesta que no tiene los documentos de la moto y me entrega la cédula de ciudadanía que deja de presente. yo tengo asignado un alcohosensor de tamizaje, es el que se usa para determinar si hubo o no hubo ingesta de licor minutos antes o momentos previos a la práctica de la prueba o la conducción, le pido el favor de que usted sople en este alcohosensor de tamizaje, y usted se niega en dos ocasiones a realizar la prueba, diciendo yo no soplo, motivo por el cual lo debemos esposar para hacer el traslado en una camioneta oficial de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá hasta la Estación de Tránsito para ser practicada la prueba de alcoholemia (...)".

Secretaría Distrital de Movilidad





Posteriormente, el Subintendente CAMILO ANDRES ORTIZ CASILIMAS, le pregunta al ciudadano que si eso fue lo que ocurrió o si hay algo que no haya sido así, a lo cual el señor AMADEUS CRISTIAN CAMILO DIAZ CARDENAS contestó que sí, pero que el Agente había sido agresivo.

Posterior a ello, la agente CAMILO ANDRES ORTIZ CASILIMAS le informó al señor AMADEUS CRISTIAN CAMILO DIAZ CARDENAS acerca de la normatividad que regula el procedimiento administrativo de prueba de alcoholemia, indicándole que cualquier pregunta o inquietud podía ser elevada en cualquier momento, manifestándole que él había sido presentado para la realización de la prueba en calidad de conductor ante la presencia de un aparente aliento alcohólico; señalándole que tal diligencia se regía por los preceptos de la Ley 1696 de 2013, la Sentencia C-633 de 2014 expedida por parte de la Corte Constitucional y la Resolución No. 1844 de 2015 dictada por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Aunado a lo anterior, el uniformado (a) le puso de presente al señor **AMADEUS CRISTIAN CAMILO DIAZ CARDENAS** el objeto de la prueba de alcoholemia y la naturaleza de la misma, contenida en el artículo 150 de la Ley 769 de 2002, Código Nacional de Tránsito Terrestre. Así mismo, le precisó al presunto infractor la existencia de diferentes tipos de pruebas para determinar la alcoholemia o la embriaguez, señalándole la posibilidad de realizar pruebas de tipo directo o de tipo indirecto, aclarándole que para su caso particular se adelantaría una prueba de tipo indirecto mediante la medición de etanol en aire espirado, sin generársele ningún tipo de lesión.

En cuanto a las pruebas de tipo indirecto, se le indicó al señor **AMADEUS CRISTIAN CAMILO DIAZ CARDENAS** que las mismas correspondían al examen clínico mediante médico legista o la prueba de sangre u orina, informándole que las mismas podrían ser realizadas inmediatamente después de que se le realizara la prueba mediante aire espirado, las cuales se realizarían en caso de que él las estimara convenientes y bajo su peculio. Seguidamente, se le informó al ciudadano las consecuencias de los resultados de la prueba de alcoholemia, al tenor de lo dispuesto en la Ley 1696 de 2013.

Por tanto, se le manifestó que de obtenerse en la primera medición un resultado de 0 a 19 mg de etanol/100 ml de sangre se entendería que la prueba era negativa y no se tomarían más muestras, dándose por terminada la diligencia; contrario sensu, si el primer resultado era igual o superior a 20 mg de etanol/100 ml de sangre, se entendería que la prueba era positiva y se realizaran las subsiguientes mediciones necesarias hasta obtenerse una pareja de resultados válida y de esta forma determinar el grado de alcoholemia o embriaguez en que se encontraba, de acuerdo con lo dispuesto en el **Anexo 6 de la Resolución No. 1844 de 2015** expedida por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Además, se le refirió al señor **AMADEUS CRISTIAN CAMILO DIAZ CARDENAS** la existencia de cuatro (04) grados de alcoholemia y/o embriaguez y las sanciones correspondientes a cada uno de estos grados, en consideración a lo establecido en la Ley 1696 de 2013; igualmente, se le puso de presente el contenido del parágrafo tercero del artículo 5 de la Ley 1696 de 2013, explicándosele que la persona que fuese presentada en calidad de conductor para la realización de prueba de alcoholemia y pese a contar con todas las garantías para la realización de la misma, se negará a efectuarla, se diera a la fuga del lugar o no la llevara a cabo conforme las instrucciones brindadas, se le impondrían las sanciones máximas establecidas en la ley.

También, se le manifestó al presunto infractor que en caso de estar en desacuerdo con el procedimiento realizado o con los resultados obtenidos en la prueba de alcoholemia, contaba con el término de cinco (05) días hábiles para efectuar la correspondiente impugnación ante la Secretaría Distrital de Movilidad de la ciudad de Bogotá, D.C.; procedimiento que podría adelantar de forma personal o mediante un apoderado de confianza. A continuación, el uniformado (a) le enseñó al ciudadano el dispositivo alcohosensor que se utilizaría para la realización de la prueba, precisándole que el mismo era de marca INTOXIMETERS VXL 19543, debidamente calibrado el día 12 DE MAYO DE 2023; concluyendo que este se encontraba en óptimas condiciones para ser operado y para la toma de la prueba. En este punto se le pregunta al examinado si tiene alguna pregunta y este manifiesta que ha entendido todo.

Bajo este entendido, la agente CAMILO ANDRES ORTIZ CASILIMAS procede a explicarle al presunto infractor la forma en que se llevaría a cabo la prueba, indicándole la forma correcta de realizar el soplo, haciendo una

Secretaría Distrital de Movilidad





demostración práctica de la forma correcta de efectuar el soplo y haciendo hincapié en que el soplo debía ser constante y sostenido por aproximadamente 05 segundos, sin ningún tipo de suspensión o pausa.

Así las cosas, procede el agente **CAMILO ANDRES ORTIZ CASILIMAS** a realizarle la prueba al señor **AMADEUS CRISTIAN CAMILO DIAZ CARDENAS**, prueba que desde el inicio el ciudadano **SE NEGÓ** a realizarse, lo que no permite determinar el estado o no de embriaguez en que se encontraba, observaciones que quedaron registradas en el formato de entrevista, el cual el ciudadano se negó a firmar y colocar huella, documento que hace parte integral del expediente.

Por lo anteriormente expuesto, el uniformado (a) CAMILO ANDRES ORTIZ CASILIMAS le recuerda el contenido del parágrafo tercero del artículo 5 de la Ley 1696 de 2013, bajo el supuesto de que el conductor que pese a ser requerido con la plenitud de garantías para la realización de la prueba de alcoholemia, se niegue a ello, la realice de forma incorrecta o se dé a la huida del lugar de los hechos, se le impondrían las sanciones máximas establecidas en la ley.

De acuerdo con la anterior relación fáctica, procede esta Autoridad de Tránsito al análisis de la presente prueba documental, comenzando por advertir que de la misma es posible deducir con grado de certeza los siguientes hechos probados:

- Al señor AMADEUS CRISTIAN CAMILO DIAZ CARDENAS se presentó en calidad de conductor para la realización de la prueba de alcoholemia, con sustento en lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley 769 de 2002, Código Nacional de Tránsito Terrestre.
- Al momento de realización de la prueba de alcoholemia existían todas las garantías constitucionales y legales para la realización de la misma.
- ➤ El uniformado (a) CAMILO ANDRES ORTIZ CASILIMAS se encontraba debidamente capacitada y certificada para la realización de dicho procedimiento.
- > Se le brindó al ciudadano una explicación clara y precisa tanto de la normatividad propia del asunto y de la forma en que debía llevar a cabo la prueba.
- ➤ El señor **AMADEUS CRISTIAN CAMILO DIAZ CARDENAS** manifestó de forma libre y voluntaria que había entendido la información brindada por parte del agente alcohosensorista.
- Se diligenció de forma correcta el formato de entrevista previa, conforme lo establece la Resolución No. 1844 de 2015 expedida por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
- > Pese a las múltiples explicaciones, el presunto infractor se NEGÓ a realizar la prueba de alcoholemia.

Adicionalmente, en la grabación se logra evidenciar el procedimiento de notificación de la orden de comparendo, pues como se manifestó por parte del agente Casimillas, fue el mismo quién realizó la señal de PARE al ciudadano y quien intentó la toma de la muestra con el equipo de tamizaje para posteriormente iniciar el procedimiento para toma de prueba de alcoholemia con equipo alcohosensor de registro, en la que, como se anotó, el ciudadano después de escuchar atentamente la explicación manifestó libremente que no permitía su realización. Se observa que, el señor DIAZ no firma la orden de comparendo y por ello se solicita la firma de un testigo de nombre JOHN WILINTON CARDOZO MANCIPE con C.C. 1030590651.

Con la probanza de los anteriores hechos, consciente este estrado contravencional que se reúnen las condiciones necesarias para dar aplicabilidad a los supuestos establecidos en el parágrafo tercero del artículo 5 de la Ley 1696 de 2013, particularmente porque se determina con grado de certeza que el día 03 DE JULIO DE 2023, el señor AMADEUS CRISTIAN CAMILO DIAZ CARDENAS no realizó la prueba de alcoholemia conforme las instrucciones brindadas por parte del agente CAMILO ANDRES ORTIZ CASILIMAS; pese a que existían todas las garantías para la realización de la prueba y se le brindó la información necesaria y suficiente para realizar la misma.

Aunado a lo anterior, encuentra este Organismo de Tránsito que esta prueba documental es conducente, pertinente y útil, bajo las siguientes consideraciones: es conducente, porque durante su creación e incorporación a este plenario se respetaron estrictamente los preceptos constitucionales y legales en materia probatoria, considerándose que la misma es legal; en cuanto a la pertinencia, se extrae que la misma tiene una intrínseca

Secretaría Distrital de Movilidad





relación con los hechos objeto de análisis, especialmente con la **RENUENCIA** del señor **AMADEUS CRISTIAN CAMILO DIAZ CARDENAS** en realizar la prueba de alcoholemia. Respecto de la utilidad, se avizora que esta prueba es el medio probatorio ideal para demostrar con grado de certeza que el investigado no realizó la prueba de alcoholemia de manera correcta, a pesar de las explicaciones dadas y la existencia de plenitud de garantías para ello.

Ahora bien, conforme lo dispuesto en el artículo 244 de la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso, se identifica que este medio probatorio es auténtico para este Despacho Contravencional, ya que existe certeza de la persona que elaboró la prueba y en el curso de esta actuación no ha existido algún tipo de tacha de falsedad sobre la misma.

En conclusión, deduce este organismo de tránsito que este medio de prueba aleja cualquier asomo de duda respecto de la conducta investigada y por tanto resulta legitimo jurídicamente imponer al señor AMADEUS CRISTIAN CAMILO DIAZ CARDENAS las sanciones correspondientes al fenómeno de la renuencia, al no realizar la prueba de alcoholemia de manera correcta, de acuerdo con lo consagrado en el parágrafo tercero del artículo 5 de la Ley 1696 de 2013.

Aunado a todo lo anterior, es claro que el señor **AMADEUS CRISTIAN CAMILO DIAZ CARDENAS** gozó de todas las oportunidades procesales para ejercer su derecho de defensa y contradicción, dándole esta autoridad la oportunidad para que asistiera a la presente diligencia junto con un abogado de confianza si así lo deseaba, de acuerdo con el artículo 138 del Código Nacional de Tránsito Terrestre, Ley 769 de 2002; y brindándole así mismo la oportunidad para que rindiera su versión libre y espontánea acerca de los hechos que originaron la notificación de la orden de comparendo de la referencia y su consecuente solicitud de pruebas.

No obstante, el presunto infractor no se hizo presente en esta diligencia a pesar de que fue notificado de la Orden de Comparendo No. **1100100000038965225.**

Una vez hechas las anteriores consideraciones, este Despacho encuentra procedente sancionar al señor **AMADEUS CRISTIAN CAMILO DIAZ CARDENAS**, por haber incurrido en el **fenómeno de la renuencia** descrito y regulado en el parágrafo tercero del artículo 5 de la Ley 1696 de 2013, particularmente por **NEGARSE** a realizar la prueba de alcoholemia, pese a contar con todas las garantías para ello, conforme se analizó líneas atrás.

IV. FUNDAMENTOS DEL DESPACHO

Teniendo en cuenta la valoración probatoria realizada por parte de esta autoridad, entra este Despacho a decidir de fondo acerca del asunto de controversia en la presente diligencia, por lo que habiéndose elaborado la Orden de Comparendo No. 1100100000038965225 y en virtud del procedimiento establecido para estos efectos por los artículos 135 y 136 de la Ley 769 de 2002, Código Nacional de Tránsito Terrestre; reformados por los artículos 22 y 24 de la Ley 1383 de 2010 y el artículo 205 del Decreto 019 de 2012, debe determinarse la responsabilidad contravencional del señor AMADEUS CRISTIAN CAMILO DIAZ CARDENAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1024534745, por haber incurrido en la figura de la renuencia descrita en el parágrafo tercero del artículo 5 de la Ley 1696 de 2013, particularmente por no haber realizado la prueba de alcoholemia de manera correcta, pese a contar con todas las garantías para ello, el cual señala lo siguiente:

Ley 1696 de 2013 Art 5 Parágrafo 3°. "Al conductor del vehículo automotor que pese a ser requerido por las autoridades de tránsito, con plenitud de garantías, no permita la realización de las pruebas físicas o clínicas a que se refiere la presente ley o se dé a la fuga, se le cancelará la licencia, se le impondrá multa correspondiente a mil cuatrocientos cuarenta (1.440) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv) y procederá la inmovilización del vehículo por veinte (20) días hábiles". (Negrillas y subrayas fuera de texto)

Aunado a lo anterior, es importante señalar:

Secretaría Distrital de Movilidad





Que el Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia expresa que: "(...) El debido proceso se aplicará a toda actuación judicial y administrativa (...)".

Que le Corresponde a la Policía de Tránsito velar por el cumplimiento del régimen normativo de tránsito y transporte, por la seguridad de las personas y cosas en la vía pública.

Que, de acuerdo al control de tránsito establecido en el artículo 8 de la ley 105 de 1993, "las funciones de policía de Tránsito serán de carácter preventivo, de asistencia técnica y humana a los usuarios de las vías y de carácter sancionatorio, (amonestación, multa, suspensión de la licencia, etc. Art 122 del CNT) para quienes infrinjan las normas (...)"

Que nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con la observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio, (Artículo 6 C. P., concordante: Art. 6 CPP, Constitución Nacional Art. 6, 26, 28, 29, 34, 91, 124, 213.).

Así mismo, es de anotar que el agente de tránsito quien notificó la orden de comparendo de la referencia, es un servidor público investido de una presunción de legalidad en sus procedimientos, ya que actúa acatando el artículo segundo de la Constitución Política de Colombia de 1991 y en cumplimiento específico de sus funciones por ser parte de la Policía Nacional; acatando también el artículo 218 constitucional que en su tenor literal indica: "(...) La ley organizará el cuerpo de Policía. La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. La ley determinará su régimen de carrera, prestacional y disciplinario (...)" (Negrillas y subrayas fuera de texto), quien además no tiene ningún interés específico más allá del cumplimiento de sus funciones.

Considera también esta autoridad de tránsito, que debe manifestarle al señor AMADEUS CRISTIAN CAMILO DIAZ CARDENAS, que la actividad de conducir es una ACTIVIDAD PELIGROSA, viéndose lo expresado por parte de la Honorable Corte Constitucional:

"(...) En primer lugar, (i) es ampliamente reconocido por la jurisprudencia colombiana, que la actividad de conducción es una actividad peligrosa que justifica una intervención acentuada e intensa por parte de las autoridades con el propósito de controlar los riesgos que a ella se anudan y, en segundo lugar, (ii) como consecuencia de lo anterior existe una relación de especial sujeción entre los conductores y las autoridades de tránsito que permiten la imposición de obligaciones especiales, tal como es reconocido desde el artículo 1º del Código Nacional de Tránsito, en el que se establece que aunque todo colombiano tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, "está sujeto a la intervención y reglamentación de las autoridades para garantía de la seguridad y comodidad de los habitantes, especialmente de los peatones y de los discapacitados físicos y mentales, para la preservación de un ambiente sano y la protección del uso común del espacio público"

Teniendo en cuenta el pronunciamiento frente a ese punto, es claro que asiste para todos los conductores el deber objetivo de cuidado por el riesgo que existe para la vida y la integridad tanto de quien conduce como de las personas que se puedan ver involucradas en este tipo de hechos.

Así mismo, el Código Nacional de Tránsito Terrestre reza en su Artículo 150: "Examen. Las autoridades de tránsito podrán solicitar a todo conductor de vehículo automotor la práctica de examen de embriaguez, que permita determinar si se encuentra bajo efectos producidos por el alcohol o las drogas, o sustancias estupefacientes, alucinógenas o hipnóticas (...)".

Ahora bien, según la Guía para la Determinación Clínica Forense del Estado de Embriaguez Aguda que, (...) "<u>La embriaguez es un estado de intoxicación aguda</u> con diversas manifestaciones psíquicas y físicas, de intensidad variable, evaluadas y diagnosticadas mediante un examen clínico-forense por un médico o médica, quien determina la necesidad de realizar o no exámenes paraclínicos complementarios. Sin embargo, una de las eventualidades que disminuye la utilidad de esta prueba es la falta de oportunidad en la solicitud de examen médico forense por parte de la autoridad competente. La intoxicación aguda por alcohol etílico tiene particular connotación

Secretaría Distrital de Movilidad





por el consumo amplio y socialmente aceptado en muchas partes del mundo, y por generar en la persona cambios psicológicos, orgánicos y neurológicos de corta duración en el tiempo, que ponen en peligro no solo su seguridad personal, sino también la de otros, en especial cuando se portan armas de fuego, se conduce un medio de transporte o se realizan labores que implican riesgo o responsabilidad. Lo mismo sucede con otras sustancias depresoras, estimulantes, alucinógenas o con efectos mixtos, cuyo consumo también produce alteraciones psíquicas, orgánicas y neurológicas que afectan la capacidad del individuo para realizar este tipo de actividades o para someter a un estado de indefensión a una víctima para lograr de ella un objetivo propuesto". (Versión 02 dic. 2015 pag.9). (Subrayado y negrilla fuera del texto).

En este sentido, este Despacho encuentra más allá de toda duda razonable que el señor **AMADEUS CRISTIAN CAMILO DIAZ CARDENAS** para el día y hora en que fue trasladado a la oficina de alcoholimetría de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Metropolitana de Bogotá, D.C., no realizó la prueba de alcoholemia de manera correcta conforme a las instrucciones brindadas, pese a contar con todas las garantías para, tal y como quedó consignado en el relato de los hechos y conforme a las pruebas que fueron válidamente obtenidas, incorporadas y analizadas en este proceso.

Al respecto la Honorable Corte Constitucional en su Sentencia C-633 del 03 de septiembre de 2014 considera:

"(...) En relación con el examen del parágrafo tercero de la Ley 769 de 2002, adicionado a dicha ley por el artículo 1º de la Ley 1548 de 2012 y subrogado por el artículo 5º de la Ley 1696 de 2013, la Corte considera que no quebranta la Constitución. Esta conclusión se funda en dos consideraciones básicas: (i) la actividad de conducción es una actividad peligrosa que justifica una intervención acentuada e intensa por parte de las autoridades; y (ii) tal circunstancia implica una relación de especial sujeción entre los conductores y las autoridades de tránsito, que permite la imposición de obligaciones especiales. A partir de ello la Corte consideró: (i) Que la fijación de una obligación de acatamiento de las instrucciones impartidas por una autoridad de tránsito encuentra fundamento constitucional en el artículo 6º conforme al cual los particulares son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes y en el artículo 95 que establece la obligación de toda persona de cumplir la ley y la Constitución; (ii) Que cumplir el requerimiento hecho por las autoridades de tránsito para la realización de las pruebas físicas o clínicas orientadas a determinar la presencia de alcohol en el cuerpo de un conductor, persigue una finalidad constitucional de alto valor en tanto pretende controlar los riesgos asociados a la conducción y, en particular, su intensificación cuando se conduce bajo los efectos del alcohol; (iii) Que la obligación de realizar las pruebas físicas o clínicas no tiene un impacto en el derecho a la no autoincriminación en tanto no se trata de la obligación de efectuar una declaración o manifestación sobre determinados hechos; (iv) Que aunque dicha obligación restringe la posibilidad de asumir comportamientos pasivos como forma de defensa, se encuentra justificada dado que su finalidad consiste en controlar una fuente de riesgo para la vida y la integridad personal, empleando una medida que genera incentivos suficientes para admitir la práctica de la prueba. A juicio de la Corte; (v) Cuando las personas adoptan la decisión de conducir vehículos automotores aceptan integrarse a una relación de especial sujeción respecto de las autoridades de tránsito que permite a estas prevenir y sancionar los comportamientos que pueden afectar o agravar la seguridad del tránsito (...)". (Subrayado y negrilla fuera del texto).

Así las cosas y teniendo en cuenta las pruebas analizadas y valoradas en esta investigación, este Despacho encuentra que el señor **AMADEUS CRISTIAN CAMILO DIAZ CARDENAS**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. **1024534745**, el día **03 DE JULIO DE 2023**, **SE NEGÓ** a realizarse la prueba de alcoholemia conforme las instrucciones brindadas por la agente operadora del dispositivo alcohosensor, pese a contar con todas las garantías para ello, incurriendo en la conducta descrita en el parágrafo tercero del artículo 5 de la Ley 1696 de 2013, por lo que le fue impuesta la orden de comparendo No. **11001000000038965225**.

• Ley 1696 de 2013:

"Artículo 5 (...) Parágrafo 3. Al conductor del vehículo automotor que pese a ser requerido por las autoridades de tránsito, con plenitud de garantías, no permita la realización de las pruebas físicas o clínicas a que se refiere la presente ley o se dé a la fuga, se le cancelará la licencia, se le impondrá multa

Secretaría Distrital de Movilidad





correspondiente a mil cuatrocientos cuarenta (1440) Salarios Mínimos Diarios legales Vigentes 8SMDLV) y procederá la inmovilización del vehículo por veinte (20) días hábiles". (Subrayado y negrilla fuera del texto).

"Que mediante la Ley 2294 del 19 de mayo de 2023 "Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 "Colombia Potencia Mundial de la Vida", en su artículo 313 ordenó: Créase la Unidad de Valor Básico -UVB-. (...) El Ministerio de Hacienda y Crédito Público publicará mediante Resolución antes del primero (1) de enero de cada año, el valor de la Unidad de Valor Básico –UVB aplicable para el año siguiente. El valor de la UVB para el año 2023 será de diez mil pesos (\$10.000.00). Todos los cobros; sanciones; multas; tarifas; (...) actualmente denominados y establecidos con base en salarios mínimos o en Unidades de Valor Tributario - UVT-, deberán ser calculados con base en su equivalencia en términos de la Unidad de Valor Básico -UVB- del año 2023, conforme lo dispuesto en este artículo. (...) PARÁGRAFO CUARTO. Los valores que se encuentren definidos en salarios mínimos o en UVT en la presente ley, deberán ser calculados con base en su equivalencia en términos de la Unidad de Valor Básico -UVB- conforme lo dispuesto en el presente artículo (...)"

Así las cosas, la Subdirección Financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad realizó un cálculo de las multas que se imponen, entre otras, en salario mínimos diarios legales vigentes, y convirtió los valores a UVB para el año 2023 y 2024. Tabla de liquidación comunicada mediante memorando **202361100704063 del 28 de diciembre de 2023**.

V. NORMAS INFRINGIDAS

El actuar desplegado por el **CONDUCTOR** conlleva al quebrantamiento de lo dispuesto en los preceptos mencionados y muy en particular a los contenidos en los siguientes articulados:

Constitución Nacional. Artículo 24. Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia.

Código Nacional de Tránsito artículo 55. Comportamiento del conductor, pasajero o peatón. toda persona que tome parte en el tránsito como conductor, pasajero o peatón, debe comportarse en forma que no obstaculice, perjudique o ponga en riesgo a las demás y debe conocer y cumplir las normas y señales de tránsito que le sean aplicables, así como obedecer las indicaciones que les den las autoridades de tránsito.

Ley 1696 de 2013 Artículo 4 "Los infractores de las normas de tránsito serán sancionados con la imposición de multas, de acuerdo con el tipo de infracción, así:

(...) **F.** Conducir bajo el influjo del alcohol o bajo los efectos de sustancias psicoactivas. Esta conducta será sancionada con las multas establecidas en el artículo 152 de este Código. Si se trata de conductores de vehículos de servicio público, de transporte escolar o de instructor de conducción, la multa y el período de suspensión de la licencia se duplicarán. En todos los casos de embriaguez o alcoholemia el vehículo será inmovilizado (...)".

Ley 1696 de 2013 Art 5 Parágrafo 3°. "Al conductor del vehículo automotor que pese a ser requerido por las autoridades de tránsito, con plenitud de garantías, no permita la realización de las pruebas físicas o clínicas a que se refiere la presente ley o se dé a la fuga, se le cancelará la licencia, se le impondrá multa correspondiente a mil cuatrocientos cuarenta (1.440) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv) y procederá la inmovilización del vehículo por veinte (20) días hábiles".

"Artículo 26. Modificado por el art. 7 de la ley 1383 Causales de suspensión o cancelación. La licencia de conducción se suspenderá (...) 3. Por encontrarse en estado de embriaguez o bajo el efecto de drogas alucinógenas determinado por la autoridad competente de conformidad con lo consagrado en el artículo 152 de este Código".

Artículo 131 literal F-adicionado por el artículo 4 de la Ley 1696 de 2013: "Esta conducta será sancionada con las multas establecidas en el artículo 152 de este Código. Si se trata de conductores de vehículos de servicio público, de transporte escolar o de instructor de conducción, la multa y el período de suspensión de la licencia

Calle 13 # 37 - 35

Secretaría Distrital de Movilidad

Teléfono: (1) 364 9400 www.movilidadbogota.gov.co Información: Línea 195





se duplicarán. En todos los casos de embriaguez o alcoholemia el vehículo será inmovilizado". (Negrilla fuera de texto).

Parágrafo. Modificado por el Art. 3 de la Ley 1696 de 2.013

"La suspensión o cancelación de la licencia de conducción implica la entrega obligatoria del documento a la autoridad de tránsito competente para imponer la sanción por el período de la suspensión o a partir de la cancelación de ella.

La resolución de la autoridad de tránsito que establezca la responsabilidad e imponga la suspensión o cancelación de la licencia de conducción, deberá contener la prohibición expresa al infractor de conducir vehículos automotores durante el tiempo que se le suspenda o cancele la licencia (...)".

Art. 153 del C.N.T.T. "Para Efectos legales se entenderá como resolución judicial la providencia que impone una pena de suspensión de licencia de conducción".

Por lo anterior y con base en los Artículos 22 y 24 de la Ley 1383 de 2010 que modificaron los artículos 135, y136 de la Ley 769 de 2002, y de la Ley 1696 de 2013, por medio de la cual se dictaron disposiciones penales y administrativas para sancionar la conducción bajo el influjo de alcohol u otras sustancias psicoactivas, en concordancia con la Resolución No. 1844 de 2015 expedida por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, esta Autoridad de Tránsito;

RESUELVE:

PRIMERO: Declarar CONTRAVENTOR al señor AMADEUS CRISTIAN CAMILO DIAZ CARDENAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1024534745, en calidad de CONDUCTOR del vehículo de placa OSY16E, por incurrir en la infracción codificada como F en la orden de comparendo No.11001000000038965225, particularmente por cometer la conducta descrita en el PARÁGRAFO 3 DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY 1696 DE 2013, consistente en no realizar la prueba de alcoholemia conforme las instrucciones dadas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: IMPONER al contraventor la multa correspondiente a mil cuatrocientos cuarenta (1440) Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes (SMDLV), que de conformidad con el Articulo 313 de la Ley 2294 del 19 de mayo de 2023, deberán ser calculados con base en su equivalencia en términos de la Unidad de Valor Básico – UVB vigente, que corresponden a cinco mil dieciocho coma setenta (5.018,70) UVB, equivalentes a **CINCUENTA MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL PESOS M/cte.** (\$50.187.000), pagaderos a favor de la Secretaría Distrital de Movilidad de la ciudad de Bogotá D.C., de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

TERCERO: Sancionar al **CONTRAVENTOR** con la **CANCELACIÓN** de la licencia de conducción No. **1024534745** y las demás que le aparezcan registradas en el **RUNT**, lo que implica la prohibición de realizar la actividad de conducir, a partir de la ejecutoria del presente proveído. Se recuerda al conductor que esto implica la prohibición de la actividad de conducir cualquier vehículo automotor de manera definitiva.

CUARTO: Sancionar al CONTRAVENTOR con la inmovilización del vehículo de placas OSY16E, que por tratarse de la conducta descrita en el PARÁGRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY 1696 DE 2013, deberá estar inmovilizado por el término de VEINTE (20) DÍAS HÁBILES. Cumplido el término de la sanción ordénese la entrega del vehículo.

QUINTO: En firme la presente decisión remítase el expediente a la **Dirección de Gestión de Cobro**, para lo de su competencia.

SEXTO: Registrar ante el **SIMIT/RUNT** la sanción impuesta, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente.

SÉPTIMO: Registrar en el aplicativo **SICON** la presente decisión.

Secretaría Distrital de Movilidad





OCTAVO: Notificar al señor **AMADEUS CRISTIAN CAMILO DIAZ CARDENAS**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. **1024534745**, de la presente decisión de conformidad con el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011; en concordancia con el inciso tercero del parágrafo del artículo 3 de la ley 1696 de 2013.

NOVENO: Contra la presente decisión procede el recurso de apelación el cual deberá ser interpuesto ante la **Dirección de Investigaciones Administrativas al Tránsito y Transporte**, dentro de los **DIEZ (10) DÍAS HÁBILES** siguientes a la notificación de la presente decisión, acorde a lo establecido en el artículo 134 del Código Nacional de Tránsito Terrestre en concordancia con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011.

En cumplimiento del Artículo 11 de la Ley 1843 del 14 de Julio de 2017, se deja constancia de la celebración efectiva de la Audiencia.

No siendo otro el motivo de la presente se da por terminada, siendo las **09:00 a.m.**, una vez leída y aprobada se firma por quienes en ella intervinieron.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

DARIELA TRUJILLO DOMINGUEZ AUTORIDAD DE TRÁNSITO SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

Proyectó: Johanna Marcela Wilches – Abogada Subdirección de Contravenciones

